

CLAVES PARA LA APROXIMACIÓN AL FENÓMENO DE LA TRATA DE SERES HUMANOS CON FINES DE EXPLOTACIÓN LABORAL EN EL SECTOR DEL TRABAJO DE HOGAR

<https://doi.org/10.21814/uminho.ed.205.6>

*Diego Boza Martínez**

1. Planteamiento

Durante el siglo XXI la trata de seres humanos se ha convertido en una cuestión de máxima actualidad e interés para los distintos operadores del sistema penal. Tanto en los discursos públicos como en las normativas, la trata ha ido alcanzando una notable relevancia, transformando incluso su denominación desde la decimonónica trata de blancas hasta la actual trata de seres humanos¹.

La aprobación de Convenios internacionales sobre la materia, así como la incorporación de diferentes normas de la Unión Europea, propiciaron que los Estados, entre ellos España, incorporasen a su legislación nacional una tipificación específica de este delito siguiendo los criterios marcados por las normas internacionales y supranacionales. En el caso del ordenamiento español, tal tipificación llegó en 2010 con la incorporación en el Código penal del artículo 177 bis, en el que se recoge el delito de trata de seres humanos.

No obstante, la preocupación por la trata no se limitó a su tipificación sino que esta vino acompañada de una serie de iniciativas como el nombramiento del Relator Nacional contra la Trata, la creación de una Subcomisión para el análisis y estudio de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual en el Congreso de los Diputados o la aprobación de planes estratégicos nacionales contra la trata.

* Profesor Contratado Doctor de Derecho penal de la Universidad de Cádiz.

1 Sirva como ejemplo la diferencia entre el Convenio internacional del 4 de mayo de 1910 para la represión de la trata de blancas y el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos de 2005.

En el caso español, el interés esencial en relación con la trata se ha centrado en una de sus modalidades, en concreto, en la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Así lo pone en evidencia, por ejemplo, que el I Plan Integral de lucha contra la trata de seres humanos para los años 2009 a 2012, se refiriese explícitamente a la trata con fines de explotación sexual. Lo mismo ocurrió con su renovación, en el Plan Integral 2015-2018 que aludía, explícitamente, a la Trata de Mujeres y Niñas con Fines de Explotación Sexual y con la Subcomisión creada en el Congreso de los Diputados.

Sin embargo, en los últimos años, el foco de la trata se ha ampliado y ha englobado también otras formas de trata. De hecho, el Grupo de Expertos en la Lucha contra la Trata de Personas-GRETA del Consejo de Europa, en su segundo informe de evaluación a España publicado en junio de 2018², instaba a las autoridades españolas a adoptar, con carácter prioritario, un plan integral que hiciera frente a la trata de personas cualquiera que fuera la forma de explotación perseguida. En consecuencia, el III Plan Integral de lucha contra la trata de seres humanos ya englobaba en su denominación todas las formas de trata: Plan Estratégico Nacional contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos 2021-2023.

Con todo, la presencia de casos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral sigue siendo minoritaria en relación con el global de las víctimas detectadas y de los casos incoados³. Ello es especialmente llamativo si se toma en consideración un sector específico, como el del trabajo de hogar. En este sector confluyen tres de las circunstancias de vulnerabilidad más habituales para la victimización de trata. Sin embargo, su presencia en las estadísticas oficiales es muy minoritaria lo que lleva a plantearse la existencia de una alta cifra negra entre las trabajadoras dedicadas a esta actividad.

En este trabajo se partirá de una revisión de la evolución normativa del concepto de trata para identificar algunos elementos básicos en el perfil de víctimas de la trata de seres humanos. Estos criterios se pondrán en relación con el perfil de las personas que realizan las actividades laborales de hogar en España para determinar su coincidencia.

2 GRETA. *Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by Spain*, p. 65. Publicado el 20 de junio de 2018 y disponible en: <https://rm.coe.int/greta-2018-7-frg-esp-en/16808b51e0> [fecha de consulta: 24/1/2025].

3 Tania GARCÍA SEDANO, *El trabajo forzoso, la esclavitud y sus prácticas análogas como finalidades del delito de trata de seres humanos*, Reus, Madrid, 2021, p. 18.

Con esta relación y ante la escasa repercusión de los casos de trata de seres humanos en este ámbito, se esbozarán algunas de las razones que pueden justificar esta situación y se plantearán algunas alternativas para sacar a la luz estos casos. Si es que realmente quieren sacarse a la luz.

2. Evolución normativa del concepto de trata

En el desarrollo de esta revisión de la evolución normativa del concepto de trata conviene citar, en primer lugar, el Protocolo de Palermo del año 2000⁴. En el artículo 3 de este Protocolo se define la trata como “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”.

Son tres, por tanto, los elementos que configuran esta definición⁵. En primer lugar, la acción o elemento traslativo de las víctimas que engloba todo el proceso de desplazamiento, desde la captación hasta su acogida y recepción. En segundo lugar, la anulación de la voluntad de la víctima a través de medios coercitivos o análogos como el uso de la fuerza, la amenaza o la compraventa. Por último, se requiere también una finalidad de explotación. En este caso, el Protocolo de Palermo señala que, como mínimo, esta explotación comprende la explotación sexual, la explotación laboral, con referencia a trabajos o servicios forzados o la esclavitud o prácticas similares, y la extracción de órganos.

En el ámbito de la Unión Europea, en 2002 se aprobó la Decisión marco del Consejo, de 19 de julio de 2002, relativa a la lucha contra la trata de seres

4 Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, hecho en Nueva York el 15 de noviembre de 2000. BOE núm. 296, de 11 de diciembre de 2003. Previamente pueden identificarse otras iniciativas relacionadas con la trata, como el Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena, denominado Convenio de Lake Success, si bien este texto no contiene una definición jurídica del concepto de trata.

5 Elsa FERNANDO GONZALO, “Marco jurídico internacional de la trata de personas”, *Cuadernos De-suto de Derechos Humanos*, Núm. 94, 2019, pp. 37 y ss.

humanos⁶. Esta Decisión marco se circunscribía a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral o sexual exigiendo en su artículo 1 que todos los Estados miembros castigasen los actos consistentes en trata de seres humanos. Entre las principales peculiaridades con respecto al Protocolo de Palermo, además de, como se ha indicado, la limitación a las finalidades de explotación laboral y sexual hay que añadir la incorporación del traspaso de control como modalidad traslativa y de la definición de abuso de situación de vulnerabilidad, entendida como aquellos supuestos en los que la víctima no tenga una alternativa real y aceptable.

Por su parte, el Consejo de Europa aprobó, en el año 2005, el Convenio de Varsovia sobre la lucha contra la trata de seres humanos⁷. Su definición sigue la línea marcada en el Protocolo de Palermo haciendo referencia al ámbito de explotación sexual, laboral o de extracción de órganos.

Estos textos fueron incorporados al Código penal español con la reforma efectuada por la LO 5/2010 que incluyó en nuestro ordenamiento penal el artículo 177 bis. De esta forma se ponía fin a la confusión que se había generado en relación con la respuesta a las situaciones de trata a través de los artículos 313 o 318 bis del Código penal, una respuesta que suponía que España no cumpliera adecuadamente los compromisos internacionales que había adquirido⁸.

No obstante, en el año 2011 la Unión Europea aprobó una nueva norma sobre la materia, la Directiva 2011/36/UE que venía a sustituir a la Decisión marco 2002/629/JAI. Como principal característica en relación con el concepto de trata, esta Directiva ampliaba los supuestos de explotación incorporando la mendicidad y la explotación para realizar actividades delictivas. Además, mantenía la referencia a la situación de vulnerabilidad, aunque en este caso el tenor literal del precepto resultaba mucho más claro al señalar que “existe una situación de vulnerabilidad cuando la persona en cuestión no tiene otra alternativa real o aceptable excepto someterse al abuso”.

Esta Directiva dio lugar a la modificación del artículo 177 bis del Código penal español, en el marco de la reforma global del Código penal desarrollada

6 Decisión marco 2002/629/JAI, DOCE núm. 203, de 1 de agosto de 2002.

7 Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos (Convenio n.º 197 del Consejo de Europa), hecho en Varsovia el 16 de mayo de 2005. BOE núm. 219, de 10 de septiembre de 2009.

8 Carolina VILLACAMPA ESTIARTE, *El delito de trata de seres humanos. Una incriminación dictada desde el Derecho Internacional*, Aranzadi, Pamplona, 2011, p. 355.

por la LO 1/2015. Esta enmienda incorporó la finalidad de explotación para realizar actividades delictivas y la de celebración de matrimonios forzados a pesar de que esta última no se encontraba en el articulado de la Directiva, aunque a la misma se hacía referencia en el Considerando undécimo.

Desde entonces, dos modificaciones más se han incorporado al artículo 177 bis. La primera, con la LO 8/2021⁹, para imponer la pena de inhabilitación especial de profesiones, oficios o actividades que conlleven contacto con menores cuando la víctima fuera menor de edad. La segunda, a través de la LO 13/2022¹⁰, vinculada a la situación derivada de la invasión rusa a Ucrania para agravar la pena en los casos en los que la situación de vulnerabilidad de la víctima venga ocasionada por el desplazamiento derivado de un conflicto armado o una catástrofe humanitaria.

Para cerrar esta revisión de la evolución de la regulación de la trata de seres humanos ha de hacerse referencia a la Directiva 2024/1712¹¹ recientemente aprobada por la UE y que incorpora dentro de las finalidades punibles de la trata la explotación de la maternidad subrogada, del matrimonio forzado o de la adopción ilegal. El Estado español tiene hasta el 15 de julio de 2026 para modificar el artículo 177 bis del Código penal e incorporar las finalidades de maternidad subrogada y adopción ilegal, que no se encuentran aún previstas en el Código penal español.

3. Las víctimas de la trata de seres humanos son mujeres extranjeras en situación de precariedad o pobreza

La descripción de la evolución del concepto de trata de seres humanos no pone de relieve dos de los elementos característicos de sus víctimas. Porque la descripción típica de la trata de seres humanos no aporta ningún elemento que determine que, de forma mayoritaria, las víctimas de este delito son mujeres. Y que no tienen la nacionalidad española.

9 Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. BOE núm. 134, de 5 de junio de 2021.

10 Ley Orgánica 13/2022, de 20 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para agravar las penas previstas para los delitos de trata de seres humanos desplazados por un conflicto armado o una catástrofe humanitaria. BOE núm. 305, de 21 de diciembre de 2022.

11 Directiva (UE) 2024/1712 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por la que se modifica la Directiva 2011/36/UE relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas. DOUE núm. 1712, de 24 de junio de 2024.

Una revisión de los datos derivados de las distintas fuentes oficiales permite corroborar esta afirmación. En concreto, de acuerdo al Balance Estadístico del CITCO (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado) desde el año 2015 al 2023 se detectaron un total de 2.618 víctimas de trata de seres humanos. De estas, 1.870 eran mujeres (71,4%).

Esta consideración se mantiene tras el análisis de los datos ofrecidos por la Fiscalía General del Estado en sus correspondientes Memorias anuales. De acuerdo a esta fuente, el 77% de las víctimas señaladas en los escritos de acusación presentados por la Fiscalía durante los cuatro últimos años son mujeres.

La especial incidencia que la trata de seres humanos tenía con respecto a las mujeres ya se contemplaba en el Protocolo de Palermo en cuyo título se hacía referencia a que la trata de personas afecta, especialmente, a mujeres y niños. Esta realidad también estaba presente en los trabajos previos a la aprobación de la Decisión marco 2002/629/JAI. Así, en el año 2000 la comunicación remitida por la Comisión al Parlamento Europeo aludía a la lucha contra la trata de mujeres. Del mismo modo, también contemplaba esta visión la Decisión 293/2000/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de enero de 2000, por la que se aprueba un programa de acción comunitario sobre medidas preventivas destinadas a combatir la violencia ejercida sobre los niños, los adolescentes y las mujeres (2000-2003) (programa Daphne).

De hecho, el impacto directo de la trata de seres humanos sobre las mujeres había llevado a su consideración como una forma de discriminación a la mujer en el artículo 6 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer¹². Bien es cierto que este artículo 6 vincula la trata como forma de discriminación con la explotación de la prostitución y, por tanto, con la trata con finalidad sexual siguiendo la línea que los tratados internacionales sobre la materia habían desarrollado hasta ese momento¹³.

12 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 34/180 de 18 de diciembre de 1979.

13 Como se ha señalado antes, el concepto comienza a ampliarse con el Protocolo de Palermo por el que se define la trata de seres humanos y diferentes modalidades de explotación. Hasta entonces la referencia más relevante era el Convenio de Lake Success de 1949 que se centraba en la vinculación entre la trata y la explotación de la prostitución y que, a su vez, hacía referencia a normas internacionales como el Acuerdo internacional del 18 de mayo de 1904 para la represión de la trata de blancas, modificado por el Protocolo aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas

A este respecto, puede señalarse que pese a que el Protocolo de Palermo amplió el enfoque sobre las finalidades de explotación de la trata, la conceptualización clásica de la trata ha impregnado el desarrollo de la lucha contra la trata de seres humanos a nivel español. Sirva como ejemplo que en el período 2013-2023 la Fiscalía haya abierto 1129 diligencias de seguimiento por trata con fines de explotación sexual y 190 por trata con fines de explotación laboral¹⁴.

En este sentido, la distinción por género en las diferentes modalidades de trata se ve marcada por esta aproximación de las instancias de persecución, tal y como se aprecia en los datos de víctimas diferenciados por modalidad de trata y por género que se presentan en el Gráfico 1.

Se puede comprobar que la gran diferencia por género se encuentra en la trata con fines de explotación sexual en la que la presencia de mujeres y niñas como víctimas es abrumadora. Sin embargo, en las cifras en relación con la trata de seres humanos con fines de explotación laboral la situación difiere y, de forma habitual, es mayoritaria la victimización masculina. Esta situación resulta llamativa al considerar, como plantea parte de la doctrina¹⁵, que la trata de seres humanos con fines de explotación laboral está relacionada con la pobreza y los empleos en los que se produce una mayor explotación son ocupaciones muy feminizadas¹⁶.

el 3 de diciembre de 1948, el Convenio internacional del 4 de mayo de 1910 para la represión de la trata de blancas, el Convenio internacional del 30 de septiembre de 1921 para la represión de la trata de mujeres y niños, modificado por el Protocolo aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de octubre de 1947 y el Convenio internacional del 11 de octubre de 1933 para la represión de la trata de mujeres mayores de edad, modificado por el precitado Protocolo,

14 Los datos de las diligencias de seguimiento de la Fiscalía se han obtenido de las diferentes memorias anuales publicadas por la Fiscalía General del Estado así como de las publicaciones específicas que sobre las diligencias de seguimiento en los años 2013-2018, 2019, 2020 y 2022 ha realizado la Fiscalía a través de su portal web fiscal.es.

15 Carolina VILLACAMPA ESTIARTE, Carolina, "Trata de seres humanos y explotación laboral: retos pendientes en la asistencia a sus víctimas", *Revista de Derecho penal y Criminología*, 3.ª Época, n.º 28 (julio 2022), p. 446.

16 Romina Carla LERUSSI, "Trabajo sucio y feminización. Lecturas jurídicas feministas", en Esteban PÉREZ ALONSO, y Sofía OLARTE ENCABO, (dirs.), *Formas contemporáneas de esclavitud y derechos humanos en clave de globalización, género y trata de personas*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2020, p. 414.

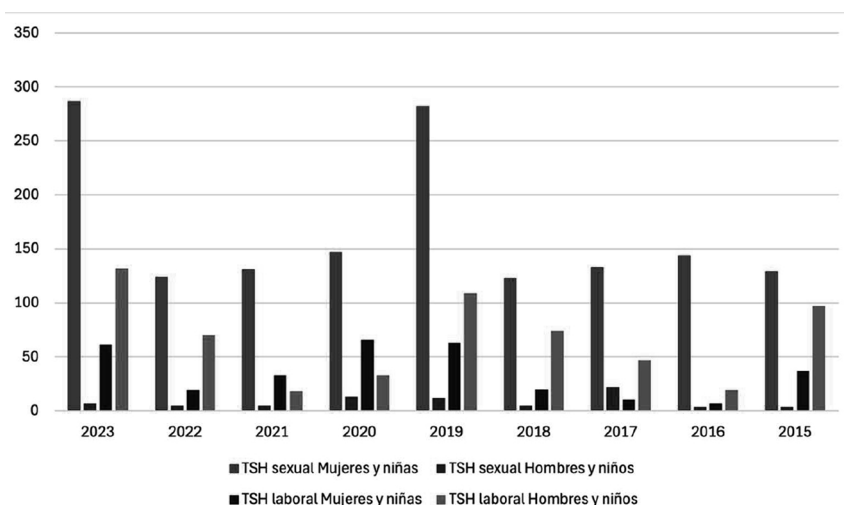


Gráfico 1. Víctimas de trata de seres humanos según sexo y tipo de trata.

Fuente: Balance Estadístico del CITCO.

Esta desproporción entre géneros y modalidades es aún más relevante si en lugar de hacer referencia al momento de identificación policial de las víctimas, se pone el foco en las fases posteriores de los procesos penales. Así, de acuerdo a los datos de la Fiscalía, en los escritos de acusación presentados entre 2020 y 2023 todas las víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual eran mujeres (346). Sin embargo, en los casos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral de las 104 víctimas, únicamente 37 eran mujeres.

Por tanto, las víctimas de la trata de seres humanos son mayoritariamente mujeres puesto que la mayor parte de los casos de trata de seres humanos detectados y perseguidos son casos de trata con fines de explotación sexual. En el caso de la explotación laboral no existe una hegemonía tan evidente de victimización de las mujeres, ya que los porcentajes de hombres y mujeres varían en función del tipo de actividad laboral del que se trate. La mayor incidencia de sectores como el agrícola o el de la construcción explica la masculinización de los datos en esta modalidad de trata en España mientras que la explotación en el hogar afecta más a las mujeres¹⁷ y la escasa incidencia de este sector se manifiesta en la baja proporción de

17 Carolina VILLACAMPA ESTIARTE, "La moderna esclavitud y su relevancia jurídico-penal", *Revista de Derecho Penal y Criminología*, 3.ª Época, n.º 10 (julio de 2013), p. 305.

mujeres como víctimas en las estadísticas oficiales de trata con fines de explotación laboral en España.

Un segundo elemento característico de las víctimas de la trata es el de su nacionalidad. O, mejor dicho, el de su condición de extranjera. Si se considera desde esta perspectiva, en el período 2015-2023, los datos del CITCO muestran que de las 2.618 víctimas, 2.508 carecían de la nacionalidad española.

Además, esta característica no se modifica según la modalidad de trata a la que se haga referencia puesto que, tanto en la trata con fines de explotación sexual como en la trata con fines de explotación laboral, las personas extranjeras suponen el 95% de las víctimas identificadas.

Es decir, que las víctimas de trata son mujeres extranjeras. Con una tercera característica como es la de su precariedad. Es la triple discriminación a la que hace referencia la profesora PARELLA RUBIO¹⁸.

Eso podría justificar que en estos años sea tan relevante el número de casos de trata con fines de explotación sexual dado que, precisamente, uno de los sectores de actividad en el que mayoritariamente confluyen estas tres características es en el de la prostitución¹⁹. No obstante, resulta difícilmente comprensible que otro sector en el que coinciden idénticas circunstancias únicamente haya dado lugar a la apertura de 38 diligencias de seguimiento vinculadas a la trata de seres humanos por parte de la Fiscalía en estos once años. Es el sector del empleo de hogar.

4. Elementos característicos del empleo de hogar en España y su relación con el perfil de víctimas de trata de seres humanos

La norma que establece el régimen jurídico del empleo de hogar en España es el Real Decreto 1620/2011 por el que se regula la relación laboral de

18 Sonia PARELLA RUBIO, *Mujer, inmigrante y trabajadora: la triple discriminación*, Anthropos, Barcelona, 2003.

19 Carmen MENESES FALCÓN, y Olaya GARCÍA VÁZQUEZ, "Prostitución, violencia y migraciones femeninas en España" *Revista CIDOB d'Afers Internacionals*, n.º 133. En el mismo sentido se muestran los datos que se desprenden del Macroestudio sobre trata explotación sexual y prostitución de mujeres, elaborado por Indexa Geodata y publicado por el Ministerio de Igualdad en 2024 (accesible en <https://violenciagenero.igualdad.gob.es/wp-content/uploads/Informe-macroestudio-trata-pdf> [fecha de consulta: 24/1/2025]).

carácter especial del servicio del hogar familiar²⁰. Esta norma sustituyó al Real Decreto 1424/1985²¹, sobre el que se había desarrollado la regulación en España del trabajo doméstico desde su consideración como relación laboral.

La denominación de ambas normas pone de relieve que la relación laboral del servicio de hogar es concebida en España como una relación laboral de carácter especial. Esta concepción se proyecta sobre su régimen normativo, que se diferencia del régimen laboral común y, también, en la aproximación desde el ámbito de la Seguridad Social. En este sentido, las trabajadoras de hogar forman parte de un subgrupo específico dentro del Régimen General de la Seguridad Social. Es lo que se conoce como Sistema Especial para Empleados de Hogar.

De acuerdo a los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social, el 31 de diciembre de 2024 se encontraban de alta en este Sistema Especial para Empleados de Hogar 352.760, de las cuales un 96% eran mujeres, concretamente 337.557.

La abrumadora feminización del trabajo de hogar en España viene acompañada de su desarrollo por personas de origen migrante, aunque en este caso las cifras no son tan impactantes. Y es que, el 31 de diciembre de 2024, el 43,3% de las personas afiliadas al Sistema Especial para Empleados de Hogar de la Seguridad Social carecían de la nacionalidad española. Este dato, no obstante, hay que analizarlo en su adecuado contexto.

En primer lugar, porque, aunque en términos globales las empleadas de hogar extranjeras no alcanzan a representar la mitad de las trabajadoras de hogar afiliadas a la Seguridad Social, el impacto relativo en este colectivo es muy alto. De hecho, en la fecha indicada, un 12% de las mujeres extranjeras afiliadas a la Seguridad Social figuraban dentro del Sistema Especial para Empleados de Hogar. Es decir, de cada 8 mujeres extranjeras que están afiliadas a la Seguridad Social, una se dedica al empleo de hogar. En comparación, este porcentaje es aproximadamente seis veces más bajo en el caso de las mujeres españolas (2,2%).

20 Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar, BOE núm. 277, de 17 de noviembre de 2011.

21 Real Decreto 1424/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del Servicio del Hogar Familiar, BOE núm. 193, de 13 de agosto de 1985.

En segundo lugar, si se analiza la serie histórica, el porcentaje de personas extranjeras afiliadas a la Seguridad Social se encuentra actualmente en una de sus tasas más bajas. De hecho, tal y como puede comprobarse en el Gráfico 2, esta cifra superaba el 50% hasta el año 2013, y alcanzó en algunos años el 60%.

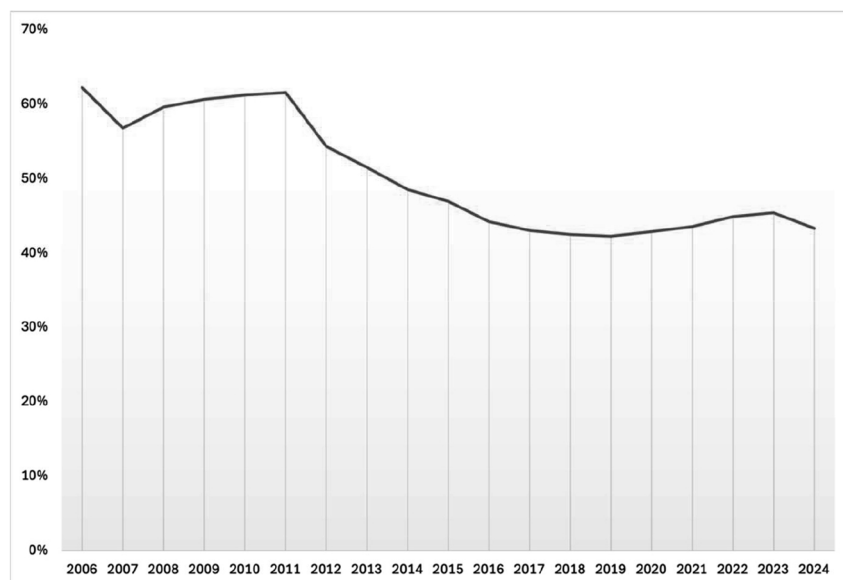


Gráfico 2. Porcentaje de personas extranjeras afiliadas al correspondiente régimen de la Seguridad Social para trabajo de hogar (Régimen especial o sistema especial). Datos a 31/12 de cada año.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social.

En este sentido, el descenso no parece vinculado a la sustitución o desplazamiento de las trabajadoras de hogar migrantes por trabajadoras españolas sino que la hipótesis más plausible es que se trata de una modificación de la situación administrativa de las mismas trabajadoras. De acuerdo a los datos del Observatorio Permanente de la Inmigración, desde 2011 casi un millón de mujeres extranjeras accedieron a la nacionalidad española. Coinciden, además, la mayoría de las nacionalidades más representadas en la afiliación en el empleo de hogar en los años con mayor porcentaje de afiliación extranjera con las que han logrado en mayor número la nacionalidad española desde entonces (Bolivia, Ecuador, Marruecos y Colombia). Por tanto, puede considerarse que la reducción del porcentaje de personas

extranjeras afiliadas en este sector responde a que muchas de las mujeres que se encontraban afiliadas han ido obteniendo la nacionalidad española, y, por tanto, en las estadísticas ya no figuran como extranjeras sino como españolas, sin que hayan abandonado este sector laboral.

En todo caso, hay un tercer elemento que obliga a dimensionar las cifras ofrecidas hasta ahora puesto que se ha hecho referencia a los datos de afiliación, es decir, de trabajo, al menos parcialmente, registrado y declarado. Sin embargo, una de las principales características del empleo de hogar es su alto tasa de economía informal. De hecho, si se comparan los datos de afiliación con los que se derivan de la Encuesta de Población Activa (EPA) de la misma fecha, se constata que más de un tercio de quienes declaran tener ocupación en el sector de trabajo de hogar no se encuentran dentro de la afiliación a la Seguridad Social. Así, de acuerdo a la EPA, en España hay unas 568.000 personas ocupadas en este sector mientras que, como se ha indicado, la afiliación a la Seguridad Social apenas supera las 350.000 personas.

En este sentido, el carácter informal de gran parte de este sector de actividad supone una intensa precarización de este empleo ante la ausencia de alta en la Seguridad Social y de contrato. Esta situación, al vincularse al elemento extranjería, conlleva que una parte muy importante de las trabajadoras se encuentren en situación administrativa irregular. De hecho, el empleo en el hogar es uno de los nichos laborales para las mujeres en situación irregular y se configura como mecanismo de entrada en el mercado laboral para muchas de estas mujeres.

Estas circunstancias ponen de manifiesto que las mujeres que desarrollan la actividad de hogar sufren situaciones graves de privación material o pobreza. Así, según los datos de Oxfam Intermon²², la pobreza de las trabajadoras de hogar multiplica en 2,7 la del conjunto de personas trabajadoras y una de cada tres vive por debajo del umbral de la pobreza. Según este informe, el sueldo bruto medio de una trabajadora del hogar es casi un 60% inferior al sueldo bruto medio total del resto de sectores de actividad.

La alta tasa de informalidad en este sector y las circunstancias socioeconómicas de las trabajadoras son caldo de cultivo para que en el trabajo de hogar se constate un alto grado de incumplimiento de la ley con un

22 OXFAM INTERMON, *Esenciales y sin Derechos: O cómo implementar el Convenio 189 de la OIT para las trabajadoras de hogar*, 2021. Accesible en: <https://cdn2.hubspot.net/hubfs/426027/Oxfam-Website/oi-informes/esenciales-sin-derechos-informe-completo.pdf> [fecha de consulta: 24/1/2025].

gran volumen de empleo en el que las condiciones laborales esenciales (jornada, retribuciones, descanso, licencias,...) no respeta los mínimos legales establecidos.

Sin embargo, las características de las trabajadoras: mujeres, migrantes, precarizadas y, en muchos casos, en situación irregular, hacen que estas personas encuentren mayores dificultades para exigir el cumplimiento de las condiciones laborales, tanto frente al empleador como frente a la Administración. Esta realidad es extensible, incluso, a las trabajadoras dadas de alta en la Seguridad Social puesto que legalmente cabe el desistimiento como causa del despido con una exigua indemnización, lo que genera en estas trabajadoras de hogar una situación de enorme inseguridad ante la posibilidad de perder el empleo y, por tanto, las enfrenta a una mayor vulnerabilidad y sometimiento cuando lo ejercen.

Y no solo en el ámbito del cumplimiento de los derechos laborales sino también en otras prácticas abusivas como la violencia sexual. El informe *Violencias sexuales en las mujeres migrantes trabajadoras del hogar y los cuidados: acciones de incidencia y prevención*, señalaba que casi el 60% de las trabajadoras de hogar habían sufrido violencia sexual en el centro de trabajo. Sin embargo, el 91% no denunció los hechos, una tercera parte por miedo y un 45% por inseguridad vinculada a su situación administrativa²³.

Con todo, la situación se agrava cuando se hace referencia al sector de las trabajadoras internas. La normativa española permite fijar la pernocta de la empleada de hogar en el domicilio de trabajo lo que supone generar un régimen de trabajadoras intensamente debilitadas, cuyo domicilio personal coincide con el laboral y que, en muchas ocasiones, a los problemas derivados de su condición de extranjera añaden el asilamiento vinculado a esta forma de trabajo²⁴. La situación de estas trabajadoras ha sido señalada

23 ASOCIACIÓN POR TI MUJER, *Violencias sexuales en las mujeres migrantes trabajadoras del hogar y los cuidados: acciones de incidencia y prevención*, 2024, accesible en: <https://asociacionportimujer.org/wp-content/uploads/2024/05/Informe-Violencias-Sexuales-2024.pdf> [fecha de consulta: 24/1/2025].

24 Como ya señaló la profesora ACALE el aislamiento migratorio es uno de los factores condicionantes de la victimización de mujeres extranjeras en España. Vid. María ACALE SÁNCHEZ, "Tratamiento jurídico y social de la mujer inmigrante víctima: modelo español", *Eguzkilore: cuaderno del Instituto Vasco de Criminología* (21), 2007, p. 206. Por su parte, la profesora VILLACAMPA señala el asilamiento como la principal circunstancia para la escasa detección de este tipo de trata. Vid. Carolina VILLACAMPA ESTIARTE, "La moderna esclavitud y su relevancia jurídico-penal", cit., p. 306.

como la más frágil y se relatan situaciones de explotación y abusos laborales, físicos y una alta prevalencia de la violencia sexual²⁵.

En definitiva, el sector de empleo de hogar está protagonizado por trabajadoras, en gran medida extranjeras o de origen migrante, y, en una proporción muy relevante, sin contrato. A ello se suma que muchas de ellas están en situación administrativa irregular en España. Estas mujeres se encuentran en situaciones sociales muy vulnerables y sufren condiciones laborales abusivas o de explotación²⁶.

Se constata, por tanto, la concurrencia generalizada de todos los elementos propios de las situaciones de trata de seres humanos, tanto en el perfil de las víctimas como en la situación de explotación. Sin embargo, como ya se ha puesto de relieve, el número de casos de trata de seres humanos detectados en este sector es absolutamente ínfimo lo que permite presumir la existencia de una alta cifra negra. En este punto es necesario cuestionarse acerca de las razones que explican esta discrepancia.

5. ¿Invisibles o invisibilizadas?

Si el empleo de hogar está desarrollado en España mayoritariamente por mujeres extranjeras pobres; si una gran parte se desarrolla en el marco de la economía informal; si en gran medida las condiciones laborales no respetan la ley; si las trabajadoras de hogar interna sufren condiciones graves de explotación e incluso violencia sexual; cabe preguntarse por qué en once años en España solo se han impulsado 38 diligencias de seguimiento vinculadas a la trata de seres humanos.

25 Véase a este respecto el informe de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) «Las mujeres inmigrantes internas en el servicio doméstico en la Bahía de Cádiz: entre la precariedad y la negación de los derechos», accesible en: https://www.apdha.org/media/informe_serv_dom_cadiz_jun2012.pdf [fecha de consulta: 24/1/2025]. En este informe se da voz a mujeres trabajadoras internas que relatan en primera persona las situaciones de explotación laboral, de abusos y de violencia sexual que han vivido. De acuerdo a los datos de ese informe, hasta el 90% de las trabajadoras del servicio doméstico interno reciben abusos o ven incumplidas de forma grave sus condiciones laborales.

26 Véase, por ejemplo, la noticia de El País del 13 de mayo de 2025 en la que se recogen los testimonios de algunas de las personas sin hogar que se ven obligadas a dormir en el aeropuerto de Barajas. En ella dos de los testimonios son de mujeres trabajadoras de hogar que habían perdido su empleo. En concreto, una de ellas se vio abocada al sinhogarismo al reclamarle al empleador, que la tenía contratada en régimen de interna, el abono de las vacaciones y responder este con el despido. “Sin dinero, desempleados o enfermos: sin rastro de solicitantes de asilo en el aeropuerto de Barajas”, El País, 13 de mayo de 2025.

Esta reflexión puede plantearse en forma de disyuntiva. ¿Se trata de una situación invisible para los poderes públicos o de una situación que se prefiere invisibilizar?

La descripción que se ha hecho hasta ahora pone en cuestión que la realidad de estas trabajadoras no sea percibida por los poderes públicos ya que es conocida y expuesta a través de numerosos informes. Bien es cierto que puede argumentarse que estas realidades se identifican de forma colectiva o global y que, sin embargo, resulta mucho más difícil que las mismas lleguen individualmente en forma de denuncia ante las instancias competentes. Sobre este punto conviene incorporar algunas reflexiones.

Una de las principales críticas que se hace al sistema español de detección de trata es que las víctimas únicamente pueden ser identificadas por los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad. No obstante, es posible que la inspección de trabajo pueda alertar a las fuerzas y cuerpos de seguridad en caso de detectar indicadores de trata durante las inspecciones. Sin embargo, esta posibilidad se encuentra, en el caso del empleo de hogar, con un obstáculo constitucional. El lugar de trabajo de las empleadas de servicio doméstico es un hogar familiar. No se trata de un centro de trabajo al uso sino de un espacio protegido por el derecho a la inviolabilidad domiciliaria recogido en el artículo 18.2 de la Constitución Española. La entrada en el domicilio a los servicios de Inspección de Trabajo queda vetada, salvo consentimiento del titular u orden judicial, lo que dificulta las tareas de control y vigilancia laboral y propicia un espacio sombrío adecuado para la vulneración de la normativa laboral.

Por tanto, en el sector de hogar la Administración no tiene la capacidad de desarrollar adecuadamente sus funciones de control. Pero tampoco los instrumentos de autotutela de los trabajadores tienen alcance suficiente. Por la configuración de estos empleos, la labor de los sindicatos es muy limitada. No tienen acceso a los puestos de trabajo, no pueden ejercer las funciones de vigilancia establecidas por la normativa laboral, ni caben las tradicionales medidas de negociación colectiva. De hecho, la sindicación de las trabajadoras de hogar es muy baja y solo en los últimos años se han creado organizadoras específicas de estas trabajadoras con un perfil más de denuncia genérica que de vigilancia específica en los hogares.

En consecuencia, la posibilidad de que las fuerzas y cuerpos de seguridad puedan detectar víctimas en este sector es ciertamente limitada ya que la intervención de la inspección de trabajo está muy restringida, los sindicatos

apenas tienen relevancia y las trabajadoras están atomizadas en sus respectivos centros de trabajo (los domicilios de sus empleadores) en los que, además, en muchos casos se encuentran aisladas y atemorizadas ante las consecuencias para su empleo, su situación personal y su situación legal de una posible denuncia.

No obstante, estas circunstancias no bastan para considerar que los posibles casos de trata de seres humanos en el sector de hogar son invisibles a los sistemas de protección. Más bien al contrario, son elementos que confluyen para hacer aparecer esta como una situación en gran medida invisibilizada. O dicho de otra manera, consentida.

En primer lugar, porque ninguna de las circunstancias expuestas resulta inmutable. De hecho, el GRETA en su informe de 2018 sobre la situación de España señaló la necesidad de ampliar las competencias de la inspección de trabajo en la prevención de la trata para que pudieran desarrollar sus funciones también en los domicilios privados²⁷. Soluciones legislativas similares podrían adoptarse para revertir los grandes desincentivos que las víctimas se encuentran antes de denunciar o para que se ampliaran los sujetos competentes para la identificación de posibles víctimas.

Las modificaciones más recientes en la legislación en la materia²⁸, que están vinculadas a la ratificación del Convenio 189 de la OIT y que suponen una mejor garantía de los derechos de las empleadas de hogar, no han venido acompañadas de medidas adecuadas para corregir el control del cumplimiento de la normativa laboral en cuanto a la protección de la seguridad y la salud en el trabajo de estas trabajadoras. Además, la incorporación de la cotización por desempleo para las trabajadoras de hogar ha incrementado los costes y ha provocado la huida a la economía informal de una parte de los empleadores. Sin embargo, los planes de actuación desarrollados por la Administración, como la campaña de actuación inspectora para regularizar salarios y cotizaciones de las empleadas de hogar impulsado en el 2022, han tenido un alcance bastante restringido puesto que se han limitado al envío de cartas dirigidas a las personas empleadoras.

27 GRETA. *Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by Spain*, cit., p. 23.

28 Se hace referencia aquí a la aprobación del Real Decreto-ley 16/2022, de 6 de septiembre, para la mejora de las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras al servicio del hogar, BOE núm. 216, de 8 de septiembre de 2022.

Tratar de hallar los motivos de estas prácticas requiere un poco de contexto. En España, hasta el año 1976 la relación entre el titular del hogar familiar y la empleada que prestaba sus servicios en el mismo no tenía la consideración de relación laboral²⁹. Los condicionantes históricos, culturales y sociales que marcaban ese acuerdo suponían que este contrato quedase fuera del marco tuitivo del derecho del trabajo y sus problemáticas se resolviesen a través de la jurisdicción civil, en el entendido de que no se trataba de una relación de trabajo sino de un pacto entre particulares.

Significaba, por tanto, dejar dentro del marco del acuerdo privado la situación que se generaba por un empleador, generalmente de clase alta, que incorporaba a la empleada no como elemento de una cadena productiva sino como instrumento de cuidado del hogar. Además, las empleadas, mayoritariamente de segmentos sociales bajos y que, en muchas ocasiones, se desplazaban desde entornos rurales a los incipientes núcleos urbanos, se incorporaban al entorno familiar en una relación basada en la confianza y de acuerdo a la cual recibían comida y alojamiento como complemento a un muy escaso salario.

Estos orígenes han dado lugar a que, en la actualidad y como se ha indicado, la relación laboral del hogar se considere una relación laboral de carácter especial. Los motivos para esta etiquetación son diversos. En primer lugar, resulta muy relevante el hecho de que la actividad se preste en el hogar familiar, un lugar diferenciado notoriamente de los entornos de actividad productiva. También ha de hacerse referencia a la propia esencia de este trabajo que no supone producción o generación de servicios sobre los que el empresario obtiene una plusvalía económica directa. Aquí, el empleador no es un empresario al uso sino una familia.

Esta circunstancia que está presente en la propia normativa es aún más evidente en el ámbito social. El factor cultural es muy relevante ya que el trabajo de hogar se concibe como una cuestión vinculada a la familia y, tradicionalmente, al rol femenino en el hogar. De esta forma, en muchos casos, el empleo de hogar no es visto por los propios requirentes de esta actividad, por los empleadores, ni por la sociedad como un auténtico trabajo y, por tanto, el respeto a la normativa laboral no se considera necesario.

29 Sobre la evolución de la regulación, véase María Jesús ESPUNY TOMÁS, "El servicio doméstico: la historia jurídica de una exclusión continuada", en María Jesús ESPUNY TOMÁS y Guillermo GARCÍA GONZÁLEZ (Coordinadores), *Relaciones laborales y empleados del hogar. Reflexiones jurídicas*, Dykinson, Madrid, 2014, pp. 27-60.

Esta visión entronca con parte de la alta cifra negra de detección de trata en este sector. Hay que recordar que la trata conlleva una finalidad de explotación. Sin embargo, en esta visión clásica del trabajo del hogar, este no es un empleo puesto que tradicionalmente ha sido desarrollado de forma gratuita, bien por las mujeres que formaban el núcleo familiar, en el caso de las familias de clase media o baja, bien por mujeres que se incorporaban al núcleo familiar desde entornos rurales y que ejercían las labores de cuidado y atención del hogar a cambio de pan, techo y una simbólica gratificación, en el caso de las familias de las clases más altas.

El empleo de hogar no casa con el concepto de explotación cuando, de toda la vida, esas labores se han hecho de forma gratuita. Y los presuntos explotadores tampoco pueden serlo si estamos hablando de familias que necesitan que alguien se haga cargo de sus ancianos, de sus niños y de las labores de hogar que el ritmo de vida de las sociedades modernas no les permite desarrollar. Y si para la sociedad no hay ni explotación ni explotadores, no puede haber trata. Aunque haya víctimas. Por ello, para el sistema, resulta mejor invisibilizar a las víctimas.

6. Conclusiones

La gravedad de las situaciones que subyacen a la trata de seres humanos ha llevado a que se intensifique el interés político, mediático y social por estas conductas. Tal gravedad se constata también en su tipificación en el Código penal con una pena que llega, en su tipo básico, hasta los ocho años de prisión.

Sin embargo, en gran medida, la conceptualización de la trata sigue estando focalizada en las conductas que están relacionadas con la explotación sexual. Esta es la modalidad de trata predominante en la literatura, en la visión social y en la actuación de los poderes públicos. No obstante, en los últimos años hay un creciente esfuerzo en la lucha contra otras modalidades de trata, especialmente contra la trata con fines de explotación laboral³⁰. Pese a ello, este esfuerzo no supone alcanzar una intensidad de respuesta similar.

La trata con fines de explotación sexual genera un importante consenso vinculado, por una parte, al propio origen del concepto de trata y, por otro, a

30 Carolina VILLACAMPA ESTIARTE, "Trata de seres humanos y explotación laboral: retos pendientes en la asistencia a sus víctimas", cit.

la clara estigmatización de la explotación sexual. El tratante y la víctima se configuran como el criminal y la víctima ideales para el imaginario colectivo. Además, la trata con fines de explotación sexual se configura como una forma de discriminación hacia la mujer y permite justificar la persecución de la prostitución.

Esta visión se extiende al ámbito de la trata con fines de explotación laboral cuando se hace referencia a la explotación laboral severa, especialmente en ciertos sectores de aprovechamiento económico, como el sector agrícola o el de empleo textil. Las imágenes de trabajadores con jornadas extenuantes o sometidos a un control brutal no son asumibles en la sociedad

Sin embargo, no ocurre lo mismo con el sector del empleo de hogar. En este capítulo se han puesto de relieve los factores característicos de quienes desarrollan esta actividad y, a pesar de que su perfil coincide con el de las víctimas de trata, es decir, mujeres, extranjeras, en condiciones de precariedad, en un sector de actividad (en gran medida) clandestino; la detección e identificación de casos y víctimas en este ámbito es mucho más limitada.

Las razones se encuentran, por un lado, en las dificultades de las autoridades de control, laborales y policiales para acceder a estas víctimas vinculadas y en los desincentivos que las mismas tienen para denunciar.

Parece necesario remover estos obstáculos planteando redimensionar el acceso a los lugares en los que se desarrolla la actividad laboral de hogar haciendo prevalecer esta condición a la de domicilio particular. Esta podría ser una primera alternativa para facilitar la detección de estos casos.

Pero se requiere ir más allá. Porque el problema no es únicamente legal, sino, principalmente, social y cultural. Es muy posible que las víctimas de la explotación laboral en el ámbito de hogar puedan cumplir el rol de víctima perfecta, pero los explotadores no cumplen el paradigma criminal. Ni son explotadores que quieren maximizar sus beneficios obligando a trabajadores a producir de sol a sol ni son oscuros delincuentes que obligan a las víctimas a realizar prácticas deshonestas. Se trata de familias que hacen desempeñar a mujeres (extranjeras y precarizadas) las labores que durante décadas realizaron otras mujeres sin recibir una remuneración a cambio.

Los datos son conocidos, los casos son narrados y visibilizados en numerosos informes, pero las actuaciones, las intervenciones contra esta realidad, siguen brillando por su ausencia. Porque una parte de la sociedad acepta

que se puedan vulnerar los derechos de las trabajadoras que desarrollan el empleo de hogar, que ha sido un empleo desempeñado tradicionalmente de forma gratuita. Las familias están dispuestas a retribuir el cuidado de sus mayores, sus niños o el hogar, actividades que resultan esenciales para que os miembros en edad laboral puedan desentenderse y mantener sus compromisos laborales, sociales y vitales, siempre que el coste sea asumible para su situación económica. Y si ello supone explotar a las trabajadoras de hogar, esa explotación también se asume.

Esta visión de una gran parte de la sociedad está en la raíz de la invisibilización de las situaciones más graves que sufren las trabajadoras de hogar.

Bibliografía

María ACALE SÁNCHEZ, "Tratamiento jurídico y social de la mujer inmigrante víctima: modelo español", *Eguzkilore: cuaderno del Instituto Vasco de Criminología* (21), 2007, pp. 203-233.

María Jesús ESPUNY TOMÁS, "El servicio doméstico: la historia jurídica de una exclusión continuada", en María Jesús ESPUNY TOMÁS y Guillermo GARCÍA GONZÁLEZ (Coordinadores), *Relaciones laborales y empleados del hogar. Reflexiones jurídicas*, Dykinson, Madrid, 2014, pp. 27-60.

Elsa FERNANDO GONZALO, "Marco jurídico internacional de la trata de personas", *Cuadernos Desuto de Derechos Humanos*, Núm. 94, 2019.

Tania GARCÍA SEDANO, *El trabajo forzoso, la esclavitud y sus prácticas análogas como finalidades del delito de trata de seres humanos*, Reus, Madrid, 2021, p. 18.

Romina Carla LERUSSI, "Trabajo sucio y feminización. Lecturas jurídicas feministas", en Esteban PÉREZ ALONSO, y Sofía OLARTE ENCABO, (dirs.), *Formas contemporáneas de esclavitud y derechos humanos en clave de globalización, género y trata de personas*, pp. 405-420.

Carmen MENESES FALCÓN, y Olaya GARCÍA VÁZQUEZ. "Prostitución, violencia y migraciones femeninas en España". *Revista CIDOB d'Afers Internacionals*, n.º 133 (abril de 2023), pp. 113-135. <https://doi.org/10.24241/rcai.2023.133.1.113>

Sonia PARELLA RUBIO, *Mujer, inmigrante y trabajadora: la triple discriminación*, Anthropos, Barcelona, 2003.

Carolina VILLACAMPA ESTIARTE, *El delito de trata de seres humanos. Una incriminación dictada desde el Derecho Internacional*, Aranzadi, Pamplona, 2011.

Carolina VILLACAMPA ESTIARTE, "La moderna esclavitud y su relevancia jurídico-penal", *Revista de Derecho Penal y Criminología*, 3.ª Época, n.º 10 (julio de 2013), pp. 293-342.

Carolina VILLACAMPA ESTIARTE, "Trata de seres humanos y explotación laboral: retos pendientes en la asistencia a sus víctimas", *Revista de Derecho penal y Criminología*, 3.ª Época, n.º 28 (julio 2022), pp. 433-480.

O CONTRIBUTO DA AUTORIDADE PARA AS CONDIÇÕES DO TRABALHO PARA A PREVENÇÃO E COMBATE AO TRÁFICO DE PESSOAS PARA EXPLORAÇÃO LABORAL

<https://doi.org/10.21814/uminho.ed.205.7>

*Maria Fernanda Campos**

Sumário: O crime de Tráfico de Seres Humanos é uma severa violação à Dignidade do Ser Humano afetando indivíduos e sociedade em elevada escala, para prevenção e combate ao qual temos evoluído, em consciencialização e meios, tendo em conta as múltiplas faces do crime. Faremos aqui um breve percurso por essa evolução contínua, com enfoque, ainda que genérico, nos recursos e mecanismos de prevenção e combate ao crime de tráfico de Seres Humanos para exploração laboral, e a integração dos sistemas de inspeção do trabalho, e dos inspetores do trabalho, como instrumento privilegiado na deteção e recolha de indícios desse sórdido crime, falando a final, no contributo da Autoridade para as Condições do Trabalho no panorama português, onde cabe ao Inspetor do Trabalho fiscalizar e assegurar o cumprimento da legislação laboral e de segurança e saúde no trabalho, nos locais de trabalho, para que sejam seguros e saudáveis, portanto, dignos para todos os trabalhadores, sem distinção.

1. Breve enquadramento

1.1. Organização das Nações Unidas

O tráfico de pessoas é um flagelo à escala global, que não acabou com a abolição da escravatura vinda do contexto dos Descobrimentos e, em pleno Século XXI, se mantém à mesma escala, com crescente sofisticação e elevada complexidade de crime organizado cada vez mais facilitada pela evolução tecnológica.

* Inspectora Geral da Autoridade para as Condições do Trabalho.

O Tráfico de Seres Humanos (TSH) é um crime hediondo que, normalmente silencioso e invisível, continua a prosperar sendo atualmente uma das atividades ilícitas mais lucrativas¹, a par do narcotráfico, por exemplo.

O Relatório Global do Gabinete das Nações Unidas contra a Droga e a Criminalidade sobre o tráfico de pessoas², a diante “o relatório”, dá-nos nota de fenómeno da ramificação global, com um crescimento de 25% do número de vítimas em 2022, em comparação com os números pré-pandemia de 2019, permanecendo as mulheres e as meninas como o maior número de vítimas deste crime. O relatório revela ainda um aumento 31% do número global de crianças vítimas de tráfico, registando-se um maior aumento (38%) de vítimas entre as meninas.

O relatório evidencia que entre 2019 e 2022, o número global de vítimas de tráfico detetadas destinadas ao trabalho análogo ao de escravo aumentou em 47%.

O relatório aponta a deteção de milhares de vítimas deste crime, porém, estima a ONU que os números reais se situam em milhões de pessoas traficadas por todo o mundo para os mais vários fins: exploração laboral; exploração sexual; tráfico de órgãos; e criminalidade forçada e mendicidade.

Ghada Waly – a Diretora-Geral/Diretora Executiva do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime – UNODC na sigla inglesa – refere no prefácio ao relatório que outro desenvolvimento importante é o facto de “As vítimas traficadas para trabalho forçado representam agora a maior fatia de todas as vítimas em todo o mundo ultrapassando aqueles que são traficados para fins de exploração sexual, embora as condenações criminais continuam a ser sobretudo focado no último³”.

1 *O tráfico de seres humanos é estimado como a terceira atividade ilegal mais lucrativa do mundo e está presente em todas as regiões.* A afirmação foi feita pelo alto comissário de Direitos Humanos da ONU, Volker Turk, numa conferência em Viena, na Áustria, a 20 de outubro de 2023 ao pedir por estratégias coordenadas para combater este tipo de crime. Noticiado em <https://news.un.org/pt/story/2023/10/1822172>, consultado a 7/02/2025.

2 UNODC, Global Report on TRAFFICKING IN PERSONS 202 – https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2024/GLOTIP2024_BOOK.pdf.

3 Tradução livre do original: “Another important development is the fact that victims trafficked for forced labour now account for the biggest share of all victims around the world, overtaking those who are trafficked for sexual exploitation, yet criminal convictions remain primarily focused on the latter.”

Reconhecidamente, os conflitos armados, os fenómenos climáticos extremos, as crises económicas, as sanitárias, e em suma, a miséria e a pobreza estão entre as principais circunstâncias que tornam milhares de pessoas vulneráveis vítimas de crime de tráfico de seres humanos.

O TSH é um crime que atinge, de forma genérica, pessoas em todas as latitudes do globo, é de elevada complexidade, multifacetado e a cada dia se torna mais e mais sofisticado, causando uma profunda devastação individual, social e económica.

Prevenir e combater este tipo de crime que constitui uma grave violação dos Direitos Humanos, violando particularmente a Dignidade das Pessoas, tem sido um processo de progressão continuada.

A Organização das Nações Unidas (ONU), onde se afirma, no preâmbulo do tratado fundador⁴ “(...) a fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor do ser humano, na igualdade de direito dos homens e das mulheres (...)”, foi precursora no estabelecimento crescente de normas internacionais que confluem para a prevenção e combate ao crime de TSH. Desde logo, em dezembro de 1948, com adoção e proclamação da Declaração Universal dos Direitos do Homem em que se afirma (artigo 1.º) que “Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos”. Adotando instrumentos particularmente direcionados à prevenção e ao combate ao TSH como, por exemplo, a Convenção para a Supressão do Tráfico de Pessoas e da Exploração da Prostituição de Outrem e a Convenção sobre os Direitos da Criança.

Sem deixar de assinalar o relevante trabalho das várias agências e programas da ONU⁵, no combate à pobreza, à doença, à exclusão, apoiando populações que se encontram em risco, contribuindo por essa via, à escala global, para a prevenção e combate ao TSH. É imperioso que se destaque para este efeito o precursor trabalho da Organização Internacional do Trabalho

4 Fundada no rescaldo de duas guerras mundiais, através da CARTA DAS NAÇÕES UNIDAS, assinada em S. Francisco. A 26 de junho de 1945, que passou a vigorar a 24 de outubro do mesmo ano.

5 Para mais detalhe ver em <https://unric.org/pt/nacoes-unidas-sistema-da-onu/> consultado a 2/2/2025

(OIT)⁶ estabelecendo normas internacionais fundamentais⁷ que se impõem como *fontes* normativas estruturantes para prosseguir na direção de um trabalho digno, combatendo as múltiplas facetas e fenómenos associados a este crime de TSH, nomeadamente para exploração laboral. Refira-se, a título de exemplo, a Convenção n.º 29 sobre trabalho forçado ou obrigatório, de 1930, e a Convenção n.º 105 sobre a abolição do trabalho forçado, de 1957, quase universalmente ratificadas; a Convenção n.º 182 da OIT sobre a interdição das piores formas de trabalho das crianças e a ação imediata com vista à eliminação do trabalho infantil, de 1999; a Convenção n.º 189 sobre os Trabalhadores Domésticos, de 2011, sem deixar de apontar a fundamental Convenção n.º 81, de 1947, ratificada por Portugal em 6 janeiro de 1962, pelo Decreto Lei 44 148, que impõe o dever do *Estado ter um sistema de inspeção de trabalho nos estabelecimentos industriais* (artigo 1.º), *que se aplicará a todos os estabelecimentos para os quais os inspetores de trabalho estão encarregados de assegurar a aplicação das disposições legais relativas às condições de trabalho e à proteção dos trabalhadores no exercício da profissão*. E ainda a Convenção n.º 129, relativa à inspeção do trabalho na agricultura, de 1969, ratificada por Portugal através do Decreto n.º 91/81 de 17 de julho, de 17 de julho, onde se impõe (n.º 1 do artigo 8.º) *que o pessoal da inspeção do trabalho na agricultura deve compor-se de funcionários públicos cujo estatuto e condições de serviço lhes assegurem a estabilidade no seu emprego e os tornem independentes de qualquer mudança de governo e de qualquer influência exterior*. A imposição de sistemas de inspeção do trabalho, garantindo aos inspetores do trabalho segurança no emprego, independência e poderes de autoridade pública, bem como, *sob pena de sanções penais ou de medidas disciplinares adequadas, a guardar sigilo, mesmo depois de terem deixado o serviço, sobre os segredos de fabrico ou de comércio ou processos de exploração de que possam ter tido conhecimento no desempenho das suas funções* e a obrigação de *tratar com confidencialidade todas as fontes de denúncia que lhes assinalem um defeito de instalação ou uma infração às disposições legais e abster-se de revelar à entidade patronal ou ao seu representante que a visita de inspeção foi consequência de uma denúncia*,

6 A Organização Internacional do Trabalho é uma agência multilateral da Organização das Nações Unidas, especializada nas questões do trabalho, especialmente no que se refere ao cumprimento das normas (convenções e recomendações) internacionais. Tem como missão promover oportunidades como o acesso a um trabalho digno (conceito formalizado pela OIT em 1999) e produtivo, a condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade humanas. O trabalho digno é considerado uma condição fundamental para combater a pobreza e as desigualdades sociais, em <https://unric.org/pt/nacoes-unidas-sistema-da-onu/>, consultado a 2/2/2025.

7 Em <https://www.ilo.org/pt-pt/resource/convencoes-ratificadas-por-numero-0> pode consultar as convenções ratificadas por ordem numérica.

(artigo 15.º, alíneas b) e c), da Convenção n.º 81)⁸, assegurando a OIT o fornecimento aos Estados, de uma base sólida de Direito Internacional, regra geral vinculativamente, que enformando o Direito dos Estados concorre para o respeito pelos Direitos Humanos.

Em consonância com os instrumentos referidos acima de forma genérica, a OIT foi criando instrumentos que densificam e apoiam a materialização da prevenção e combate ao TSH, nomeadamente salientando a importância de sistemas de inspeção do trabalho e sólidos, com competências, atribuições e funcionários capacitados para identificar, lidar com o fenómeno e sinaliza-lo aos órgãos de policia criminal⁹ (OPC) com quem devem cooperar e estar “em rede”, e também manuais de apoio a empregadores e empresas¹⁰ ou para profissionais do sistema de justiça penal¹¹, por exemplo. Foram sendo criados mecanismos de cooperação entre Estados para combate ao crime organizado, destacando-se a Convenção de Palermo¹², e

8 Veja-se a este propósito o Estatuto da Inspeção do trabalho aprovado pelo Decreto-lei n.º 102/2000, de 2 de junho.

9 TRABALHO FORÇADO E TRÁFICO DE PESSOAS, Um Manual para os Inspectores do Trabalho, consultável em https://www.google.com/search?q=TRABALHO+FOR%C3%87ADO+E+TR%C3%81FICO+DE+PESSOAS+Um+Manual+para+os+Inspectores+do+Trabalho&oq=TRABALHO+FOR%C3%87ADO+E+TR%C3%81FICO+DE+PESSOAS+Um+Manual+para+os+Inspectores+do+Trabalho&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBDtySMDQ1MTM4MWowajCoAgCwAgA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&safe=active&ssui=on

10 *Um Manual para Empregadores e Empresas. Programa de Ação Especial de Combate ao Trabalho Forçado*, pode ser consultado em https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@americas/@ro-lima/@ilo-brasilia/documents/publication/wcms_227292.pdf

11 Manual contra o tráfico de pessoas para profissionais do sistema de justiça penal, consultável em https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2009_UNODC_TIP_Manual_PT_-_wide_use.pdf

12 CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS CONTRA A CRIMINALIDADE ORGANIZADA TRANSNACIONAL, pode ser consultada em https://dcjri.ministeriopublico.pt/sites/default/files/documentos/instrumentos/convencao_nu_criminalidade_organizada_transnacional.pdf.

Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, também conhecida como *Convenção de Palermo*, é o principal instrumento global de combate ao crime organizado transnacional. Ela foi aprovada pela Assembleia-Geral da ONU em 15 de novembro de 2000, data em que foi colocada à disposição dos Estados-membros para assinatura, e entrou em vigor no dia 29 de setembro de 2003. A Convenção é complementada por três protocolos que abordam áreas específicas do crime organizado: o Protocolo Relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, em Especial Mulheres e Crianças; o Protocolo Relativo ao Combate ao Tráfico de Migrantes por Via Terrestre, Marítima e Aérea; e o Protocolo contra a fabricação e o tráfico ilícito de armas de fogo, suas peças e componentes e munições. Observa-se que os países devem ratificar a Convenção antes de aderir a qualquer um dos protocolos. A Convenção representa um passo importante na luta contra o crime organizado transnacional e significa o reconhecimento por parte dos Estados-Membros da gravidade do problema, bem como a necessidade de promover e de reforçar a estreita cooperação internacional a fim de enfrentar o crime organizado transnacional. Os Estados-membros que ratificaram este instrumento se comprometem a adotar uma série de medidas contra o crime organizado transnacional, incluindo a tipificação criminal na legislação nacional de atos como a participação em grupos criminosos organizados, lavagem de dinheiro, corrupção e obstrução da justiça. A convenção também prevê que os governos adotem medidas para facilitar processos de extradição,

também mecanismos de verificação do cumprimento das convenções, nomeadamente através de relatórios elaborados pelos Estados, sobre o grau de cumprimento das convenções ratificadas, tal como têm sido criados um manancial de informação tendo em vista “contribuir para que cada vez mais pessoas compreendam da melhor forma os direitos humanos fundamentais, o trabalho realizado pelas Nações Unidas para os promover e proteger e os mecanismos internacionais disponíveis para os tornar efetivos”¹³.

Veja-se também o reconhecimento do Trabalho Digno (formalizado pela OIT em 1999) como requisito fundamental para uma globalização justa, sendo um dos objetivos do desenvolvimento sustentável plenamente inserido na Agenda para o Desenvolvimento Sustentável 2030, assumido pelos países das Nações Unidas¹⁴. E, a par, a relevância dada aos sistemas de inspeção do trabalho e aos inspetores do trabalho como fundamentais para a promoção de um Trabalho Digno, que garanta a homens e mulheres, no domínio profissional, entre outros, igualdade de oportunidades e de tratamento; oportunidades para realizar um trabalho produtivo com uma remuneração justa; segurança no local de trabalho e proteção social para as famílias; melhores perspectivas de desenvolvimento pessoal e integração social; liberdade para expressar as respetivas preocupações; direito de organização e participação nas decisões que afetam as suas vidas. Valores de sentido diametralmente oposto aos que vivenciam as vítimas de TSH para exploração laboral.

1.2. Europa e União Europeia

Numa sociedade de *bem-estar*, como a União Europeia (UE), com instituições públicas democráticas e sólidas, fortes sistemas de proteção social, reconhecimento e adesão da generalidade dos seus cidadãos a vivências diárias que têm subjacente valores comuns, como o respeito pela dignidade humana, pareceria que o crime de TSH teria *chão* menos favorável à existência e crescimento. Assim não é.

assistência legal mútua e cooperação policial. Adicionalmente, devem ser promovidas atividades de capacitação e aprimoramento de policiais e servidores públicos no sentido de reforçar a capacidade das autoridades nacionais de oferecer uma resposta eficaz ao crime organizado. Em <https://www.unodc.org/lpo-brazil/pt/crime/marco-legal.html> consultados a 5 de fevereiro 2025.

13 Nações Unidas, Ficha nº 14, Ficha Informativa, Década das Nações Unidas para a Educação em matéria de Direitos Humanos 1995|2004. Disponível em https://dcjri.ministeriopublico.pt/sites/default/files/documentos/pdf/ficha_informativa_14_formas_escravatura.pdf

14 Guia Sobre o Desenvolvimento Sustentável, acessível em https://e4k4c4x9.delivery.rocketcdn.me/pt/wp-content/uploads/sites/9/2019/01/SDG_brochure_PT-web.pdf

“Todos os anos, contabilizam-se mais de 7000 vítimas de tráfico de seres humanos na União Europeia (UE). Só em 2022, o número de vítimas registadas atingiu os 10 093. Mesmo assim, estima-se que o número total de vítimas seja muito mais elevado, uma vez que muitas de entre elas não são detetadas. A maioria das vítimas são mulheres e raparigas, mas o número de homens está a aumentar, particularmente para a execução de trabalhos forçados”, lê-se no ARTIGO de 30-04-2024, sobre *Tráfico de seres humanos: a luta da UE contra a exploração*, da Direção-Geral da Comunicação Parlamento Europeu¹⁵ que citando o Eurostat (últimos dados relativos ao ano de 2022) nos diz que em cada 3 vítimas do crime de TSH, 2 são mulheres ou meninas; que 63,1% das vítimas são nacionais de países terceiros à UE; 11,8% são de outros Estados Membros da UE e 25,1% são do mesmo país da EU. Se consultarmos a página do Eurostat¹⁶ sobre TSH, com dados extraídos a janeiro de 2024, vemos destacado que “em 2022, houve 10.093 vítimas registadas de tráfico de seres humanos na UE e 2.097 traficantes condenados”, (destes 22% são mulheres); que 63% das vítimas registadas eram mulheres, e 37% das vítimas registadas de tráfico na UE eram cidadãos de Estados-Membros. É-nos dada nota também da tendência crescente do crime nomeadamente para exploração laboral e criminalidade forçada, sendo referido que “A prevalência da exploração laboral é quase igual à da exploração sexual”.

A consciência hoje existente sobre a perpretação do crime de TSH no espaço europeu foi gradual, como gradual foi a correspondente criação de instrumentos de prevenção e combate ao TSH na Europa, positivamente acelerada pela produção regulatória da UE, bem como, entre outros, o elevado investimento da União em políticas (e financiamento) de coesão e combate às desigualdades entre os EM.

Sem deixar de apontar a importância da Convenção Europeia dos Direitos do Homem¹⁷, assinada em 1950 pelo Conselho da Europa, visando proteger os direitos humanos e as liberdades fundamentais na Europa (e criou o Tribunal Europeu dos Direitos), e apontando a Convenção Europeia sobre o Exercício dos Direitos das Crianças adotada em 1996¹⁸, salientamos a importância da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (CDFUE),

15 Consultável em https://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/2023/10/story/20230921STO05705/20230921STO05705_pt.pdf

16 Em https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Trafficking_in_human_beings_statistics (acedida em 11 de fevereiro 2025)

17 Consultável em https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/convention_por

18 Acessível em <https://files.diariodarepublica.pt/1s/2014/01/01800/0053400543.pdf>

cujo artigo 1.º reza que “A dignidade do ser humano é inviolável. Deve ser respeitada e protegida.”, proibindo expressamente (artigo 5.º) a escravidão, o trabalho forçado ou obrigatório, bem como o tráfico de seres humanos¹⁹. Reconhecidamente não suficiente para prevenção e combate de um crime que tão gravemente fere o direito do ser humano à inviolabilidade da sua dignidade. Sucederam-se várias Recomendações das instituições europeias sobre o TSH que ampliaram a consciencialização do fenómeno que se tornou, para a UE, prioritário combater. Nessa sequência é elaborada a Convenção do Conselho da Europa Relativa à Luta contra o Tráfico de Seres Humanos, de 2005, visando a proteção das vítimas, mas também a condenação dos traficantes²⁰. Esta Convenção tem em conta as convenções da ONU, reforçando a proteção da vítima, entre e outros, combatendo tanto o tráfico transnacional como nacional, tendo ou não conexão com o crime organizado. São ainda criados mecanismos de monitorização da implementação efetiva nos EM²¹.

Não cabendo aqui ser exaustivo, sempre se saliente a importância de outros estruturantes instrumentos Jurídicos da UE que têm procurado colmar fragilidades ou lacunas existentes na regulamentação da União, visando a prevenção e combate ao TSH, como por exemplo a Decisão-Quadro do Conselho, de 19 de julho de 2002 relativa à luta contra o tráfico de seres humanos²², integralmente substituída pela Diretiva 2011/36/UE, de 5 de Abril²³ que foi recentemente alterada pela Diretiva 2024/1712 do Parlamento Europeu e do Conselho de 13 de junho de 2024, que determina, nos termos do n.º 1 do artigo 2.º, que *Os Estados-Membros põem em vigor as disposições legislativas, regulamentares e administrativas necessárias para dar cumprimento à presente diretiva até 15 de julho de 2026*. E nesses termos (n.º 2) *Os Estados-Membros comunicam à Comissão o texto das principais disposições de direito interno que adotarem no domínio abrangido pela presente*

19 CARTA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA UNIÃO EUROPEIA, 18.12.2000 Jornal Oficial das Comunidades Europeias C 364/9 Consultável em https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_pt.pdf

20 Consultável em <https://files.dre.pt/1s/2008/01/00900/0041200441.pdf>

21 “O Grupo de Peritos sobre a Luta contra o Tráfico de Seres Humanos é responsável pela avaliação da implementação da convenção pelos países que a ratificaram. O GRETA é composto por 15 peritos independentes e imparciais, nacionais dos países signatários”, em *Convenção do Conselho da Europa relativa à Luta contra o Tráfico de Seres Humanos – Mecanismo de Monitorização*, do Conselho Europeu, que pode ser consultados em <https://rm.coe.int/16805d58c9>

22 Acessível em <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a4d2dba7-2435-49cc-8156-e96c664ac7fb/language-pt>

23 Consultável em <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32011L0036>.

*diretiva*²⁴. Esta alteração veio “abordar as tendências em evolução na área do tráfico de seres humanos, bem como as deficiências identificadas pela Comissão, e para intensificar ainda mais os esforços contra este crime, deficiências identificadas da resposta do direito penal que exigem a adaptação do quadro jurídico dizem respeito a infrações relativas ao tráfico de seres humanos cometidas no interesse de pessoas coletivas, ao sistema de recolha de dados, à cooperação e coordenação a nível da União e nacional, e aos sistemas nacionais destinados à deteção e identificação precoces, à assistência especializada e ao apoio às vítimas de tráfico”, lê-se na 2.^a parte do ponto (5) do *preâmbulo*.

Sendo central para a UE a criação de um espaço de segurança e liberdade com o respeito pela inviolabilidade da Dignidade Humana, naturalmente, além do mencionados *marcos* jurídicos, muitos outros instrumentos legais da UE concorrem (como as que enquadram uma política comum de migração e asilo²⁵) para a prevenção e combate ao crime de TSH, tal como projetos e/ou programas de apoio financeiros ou outros, bem como instituições e organismos²⁶ e agências descentralizadas²⁷ que, na parte das respetivas atribuições, pugnam pela efetivação dos valores da União centrados na dignidade do ser humano e na proteção dos Direitos Fundamentais.

Sendo o Trabalho, reconhecidamente, essencial para a realização de cada um de nós e por isso, central na construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e coesa pugnada pela UE, a relevância e potencialidade reconhecida aos sistemas de inspeção do trabalho como ferramenta de efetivação do Direito da União, tem sido crescente e revelada, desde logo através de criação de espaços *dedicados* e especializados que sucintamente referiremos pelos mais marcantes no contributo para sistemas de inspeção do trabalho mais robustos e de maior centralidade na prossecução dos valores da União. Como, por exemplo, na Comissão – *European Commission’s Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion* (DG EMPL) – o Comité

24 Acessível em <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/1712/oj/eng>

25 Diretiva (UE) 2024/1346 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de maio de 2024, que estabelece normas em matéria de acolhimento dos requerentes de proteção internacional, que pode ser consultada em <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32024L1346> sobre o tema pode ainda aceder a mais informação em <https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2024/05/14/the-council-adopts-the-eu-s-pact-on-migration-and-asylum/>

26 Informação detalhada pode ser acedida em https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/types-institutions-and-bodies_pt

27 Informação detalhada em https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/search-all-eu-institutions-and-bodies_pt?f%5B0%5D=oe_organisation_eu_type%3Ahttp%3A/publications.europa.eu/resource/authority/corporate-body-classification/AGENCY_

dos Altos Responsáveis pelas Inspeções do trabalho, SLIC, na sigla inglesa que usaremos. O SLIC começou a reunir informalmente no início da década de 80 (1982) para apoiar a Comissão sobre a monitorização do cumprimento da legislação da UE nos EM. Em 1995, por decisão da que foi revista em 2008, adquiriu um estatuto formal e cabe-lhe, entre outros, avaliar e dar parecer sobre todos os assuntos relacionados com a aplicação da legislação da UE em matéria de saúde e segurança no trabalho (SST). Quer a pedido da Comissão ou por iniciativa própria do SLIC. Resumidamente, e entre outros, através da definição de princípios comuns de inspeção do trabalho no domínio da SST e do desenvolvimento de métodos de avaliação dos sistemas nacionais de inspeção do trabalho em relação a estes princípios, afere da implementação nos EM da legislação sobre SST que visa a melhoria das condições do trabalho e a redução das doenças e sinistralidade laboral na União²⁸.

Reforçando a importância das condições de trabalho seguras e saudáveis, é criada, em 1994, a Agência Europeia para a SST, EU-OSHA (na sigla inglesa) – que tem por missão a *promoção de locais de trabalho seguros e saudáveis na Europa com base no tripartismo, na participação e no desenvolvimento de uma cultura de prevenção de riscos de SST, a fim de garantir uma economia inteligente, sustentável, produtiva e inclusiva*. Contribuindo para o *Quadro estratégico da Comissão Europeia para a saúde e segurança no trabalho 2021-2027 e outros programas e estratégias relevantes da UE*²⁹.

Além da importância indiscutível da melhoria das condições do trabalho na União, garantindo a SST nos locais de trabalho e pugnando, designadamente através dos sistemas de inspeção do trabalho, pelo cumprimento dessas regras nos EM, reconhece-se a necessidade de garantir um abordagem complementar, considerando, nomeadamente, os efeitos nefastos do trabalho não declarado (TDN) quer para os trabalhadores, quer para os Estados e para a sociedade em geral³⁰, é criada então a *Plataforma Europeia de combate ao*

28 Mais informação pode ser acedida em https://employment-social-affairs.ec.europa.eu/policies-and-activities/rights-work/health-and-safety-work/senior-labour-inspectors-committee-0_en?prefLang=pt

29 Mais informação em <https://osha.europa.eu/pt/about-eu-osha/what-we-do/corporate-strategy-and-work-programmes/eu-institutions>

30 “O trabalho não declarado coloca os trabalhadores em múltiplos riscos, compromete as finanças públicas e a coesão social. Trata-se de uma reedição de um inquérito semelhante realizado em 2013 e confirma que o trabalho não declarado é um desafio persistente na UE. No último ano, um em cada dez europeus pagou por bens ou serviços não declarados e um terço dos europeus conhece alguém que trabalha não declarado. Desde o inquérito anterior, a proporção de inquiridos que veem o risco de ser capturado como elevado aumentou ligeiramente, para 39 %. Este inquérito acrescenta

*Trabalho Não Declarado*³¹, formalmente adotada em 2016³². Integrada mais tarde na Autoridade Europeia do Trabalho³³ (ELA na sigla inglesa que utilizaremos), criada em 2019, concebida para *ajudar a garantir uma mobilidade laboral justa em toda a União Europeia (UE) e apoiar a coordenação dos sistemas de segurança social*, como se lê na síntese do Regulamento (EU) 2019/1149 que institui a ELA. O que, nestes 5 anos de existência, tem contribuído, entre outros, para o combate a fraudes, a falsos destacamentos de trabalhadores, contribuindo intensamente para a capacitação dos sistemas de inspeção do trabalho e da Segurança Social e dos profissionais, nomeadamente de inspetores das autoridades nacionais com competências e atribuições legais no âmbito do mandato da ELA³⁴.

Referimos ainda a Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia (FRA), criada em 2007, com o objetivo de *prestar serviços de aconselhamento fundamentado e independente aos responsáveis políticos nacionais e da UE, contribuindo assim para alimentar o debate, as políticas e a legislação em matéria de direitos fundamentais e torná-los mais eficazes*³⁵, pela transversalidade e importância que assume no trabalho de salvaguarda dos Direitos Fundamentais e nesse âmbito desenvolver investigação sobre exploração laboral grave³⁶, e ferramentas de informação e combate a essa grave violação dos Direitos Fundamentais, tendo recentemente disponibilizado o

igualmente uma ênfase às novas formas de trabalho não declarado e de trabalho não declarado transfronteiras.” Informação acessível em https://data.europa.eu/data/datasets/s2250_92_1_498_eng?locale=pt

31 Informação genérica ainda disponível em <https://www.consilium.europa.eu/pt/policies/labour-mobility/platform-against-undeclared-work/>

32 De lembrar o contributo da REDE EURES, com 30 anos de existência, *criada para assegurar o compromisso da UE para com a livre circulação de trabalhadores, facilitando o acesso de candidatos a emprego a postos de trabalho transfronteiriços e fornecendo informações contínuas e fidede sobre o mercado de trabalho nacional e as condições de vida e supera barreiras ao emprego, de trabalho dentro da UE*, constituindo um outro mecanismo de prevenção e combate ao TSH para exploração laboral. O IEPP.IP é a entidade portuguesa que integra esta rede. Mais informação em https://eures.europa.eu/eures-turns-30-2024-02-29_pt e também em <https://www.iefp.pt/eures>

33 Para aceder a informação completa sobre a ELA veja em <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=LEGISUM:4408380>

34 A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), através do respetivo órgão máximo, integra por Portugal, o SLIC, a EU-OSHA, e a ELA, nesta ultima tendo como representante suplente a Direção Geral da Segurança Social. Também a Plataforma contra o trabalho não declarado tem a ACT como representante por Portugal.

35 Pode ser consultada mais informação em https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/search-all-eu-institutions-and-bodies/european-union-agency-fundamental-rights-fra_pt

36 resumo pode ser acedido em https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-severe-labour-exploitation-summary-0_pt.pdf e também em <https://fra.europa.eu/sites/default/>

“Manual de Treino³⁷” para Inspectores do Trabalho sob a forma *de proteger os direitos dos trabalhadores de países terceiros que trabalham na UE*, elaborado com os contributos³⁸ de várias entidades, nomeadamente da ELA e da OIT, de forma a capacitar inspectores do trabalho a perceber e lidar com o fenómeno, reconhecendo a importância dos sistemas de inspeção do trabalho e dos inspectores do trabalho na prevenção e combate ao TSH, assegurando o nível de proteção legal existente na UE³⁹.

Neste genérico enquadramento não poderíamos deixar de referir a Agência da União Europeia para a Cooperação Judiciária Penal – EUROJUST – criada em 2002 e que *facilita a coordenação judiciária e a cooperação entre as autoridades nacionais, prestando apoio prático aos procuradores na luta contra a criminalidade transfronteiriça grave e o terrorismo*⁴⁰ entre os quais se insere o crime TSH, bem como a Agência da União Europeia para a Cooperação Policial – EUROPOL – criada em 2007. A Europol “tem por missão apoiar os seus Estados-Membros na prevenção e luta contra todas as formas graves de criminalidade internacional e organizada, cibercriminalidade e terrorismo. Além disso, colabora com muitos países terceiros e organizações internacionais. As redes criminosas e terroristas em grande escala constituem uma grave ameaça para a segurança interna da UE e para a segurança e a vida dos seus cidadãos” sendo ainda identificado que entre “As maiores ameaças à segurança” se encontra o tráfico de seres humanos, a par com

files/fra-media-memo-severe-labour-exploitation_pt.pdf titulado “Exploração laboral grave: trabalhadores que se mudam no interior da UE ou para a EU”.

37 O manual *HOW WORKPLACE INSPECTORS CAN PROTECT THIRD-COUNTRY WORKERS' RIGHTS - TRAINING MANUAL* pode ser integralmente acedido em <https://fra.europa.eu/en/publication/2024/workplace-inspectors-training-manual>

38 *This manual was developed with contributions from the European Labour Authority (ELA), representatives of national labour inspectorates of selected Member States and experts from the European Commission, the International Labour Organization (ILO), the International Trade Union Confederation, the European Trade Union Confederation, the International Organization for Migration (IOM), the European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations (HEUNI), the Council of Europe, the Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM), the European Trade Union Confederation (ETUC) and the International Trade Union Confederation (ITUC). Three online meetings with experts and two online 'validation workshops' with labour inspectors were held between March and September 2023. The aim of these meetings and workshops was to review first the outline and then the key training tools stemming from the manual. The final draft manual was shared with participants for comments.* Página 5 do Manual identificado na nota supra.

39 *This manual is designed to be used by workplace inspection staff in the Member States. It is intended to empower them to enforce the protective standards in EU law that safeguard the rights of third-country workers, including seasonal workers, migrant workers with temporary permits and migrants in an irregular situation.* Pode ler-se na introdução, ao detalhado e amplamente documentado Manual.

40 Consultável em https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/search-all-eu-institutions-and-bodies/eurojust_pt

o “terrorismo; tráfico internacional de estupefacientes e branqueamento de capitais; fraude organizada; contrafação do euro”⁴¹.

2. Portugal e contributo da Autoridade para as Condições do Trabalho para o para a prevenção e combate ao TSH

Sendo Portugal membro da ONU desde a década de 50 do século passado e EM da União Europeia 1 de janeiro de 1986, foi incorporando no direito nacional (e no *modo de vida*) as obrigações decorrentes dos Tratados Internacionais, Convenções, Diretivas, Regulamentos ou outros instrumentos normativos subscritos. Pelo que a evolução legislativa nacional ocupará, de passagem, o necessário para melhor contextualização e/ou compreensão do papel da Autoridade para as Condições do Trabalho, (ACT) no quadro nacional.

Portugal, tal como a maioria dos EM da UE, tem vindo a registar falta de mão de obra em várias atividades, nomeadamente as que carecem de mão de obra intensiva. Portugal tem também vindo a assumir-se de forma rápida como um país de destino de fluxos migratórios para além dos tradicionalmente vindos de países de língua portuguesa. Como sabemos, as mulheres, as meninas e migrantes apresentam uma maior vulnerabilidade a tornarem-se vítimas de tráfico

De acordo com um estudo do Banco de Portugal inserido no Boletim Económico do Banco de Portugal de junho de 2024, sobre a caracterização a integração dos trabalhadores imigrantes no nosso mercado de trabalho, “Os trabalhadores por conta de outrem com nacionalidade brasileira destacam-se, com 209,4 mil indivíduos registados na Segurança Social em média em 2023, o que equivale a 42,3% dos trabalhadores com nacionalidade estrangeira registados na base de dados nesse ano (Gráfico 3). Refira-se que, em 2022 e 2023, o número de trabalhadores por conta de outrem com nacionalidade brasileira registou taxas de crescimento de 58,5% e 43,0%, respetivamente. As seguintes quatro nacionalidades com maior número de trabalhadores por conta de outrem registados são a indiana (41,0 mil), nepalesa (26,9 mil), cabo-verdiana (22,7 mil) e bengali (18,8 mil). No seu conjunto, estas quatro nacionalidades representam 22,1% do total de trabalhadores por conta de outrem com nacionalidade estrangeira em 2023. O número de trabalhadores por conta de outrem com nacionalidade indiana cresceu

41 Lê-se em <https://www.europol.europa.eu/about-europol:pt> onde pode aceder a informação mais detalhada.

28,1% e 42,4% em 2022 e 2023, enquanto os de nacionalidade nepalesa cresceram 39,9% e 45,6%, respetivamente. Por seu turno, os trabalhadores europeus representam 12,6% dos trabalhadores estrangeiros e registaram um aumento mais moderado nos últimos anos”⁴². De acordo como o resumo do estudo, Portugal tinha em 2023 quase meio milhão de estrangeiros empregados por conta de outrem, o que constituiu um significativo aumento face aos 56 mil de 2014. É referido ainda que na agricultura a mão-de-obra imigrante já tem um peso 40% no emprego por conta de outrem, e na hotelaria e restauração 31%.

Como referimos já, o TSH para exploração laboral tem vindo a crescer em toda UE. Assim apontam também os dados para Portugal incluídos no Relatório Anual de Segurança Interna (IASI) 2023, em que no ponto 1.3.2.5. IMIGRAÇÃO ILEGAL, TRÁFICO DE PESSOAS E CRIMES CONEXOS, refere que “No decurso dos últimos anos, resultado da investigação, regista-se uma tendência crescente de número de inquéritos entrados por “Tráfico de pessoas” e “Auxílio à imigração ilegal.” Continuando, “no crime de “Tráfico de pessoas” o aumento é de 68%, sendo relevante a vertente de exploração laboral. Esta variação reflete, no período em análise, um acréscimo em termos percentuais de 158%,” Refere ainda o IASI a existência de 30 arguidos por TSU, com 23 detidos pelo mesmo crime e ainda 650 presumíveis vítimas de TSH, com 131 confirmadas, 140 em investigação e apenas 12 “não confirmadas”⁴³.

O crime de TSH é um crime público, previsto nos termos do artigo 160º do Código Penal⁴⁴ (CP), na sua redação atual, tendo sofrido sucessivas alterações, designadamente em termos de sistematização, que, no Código Penal de 1982, se inseria no Título “Dos crimes contra valores e interesses da vida em sociedade”, passando a estar inserto no Título “Dos crimes contra as pessoas⁴⁵” numa profunda alteração de abordagem e deslocação dos bens jurídicos protegidos. Em linha com os instrumentos regulatórios a que estamos internacionalmente obrigadas, por certo, correspondendo também

42 Mais informação consultável em <https://www.bportugal.pt/publicacao/boletim-economico-junho-2024>

43 Relatório completo em <https://www.portugal.gov.pt/pt/gc24/comunicacao/documento?i=relatorio-anual-de-seguranca-interna-2023>

44 Pode ser consultado a versão consolidada em https://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?artigo_id=109A0160&nid=109&tabela=leis&pagina=1&ficha=1&so_miolo=&nversao=

45 Para maior aprofundamento veja, páginas 84 e seguinte de MELO, Manuel Fernando da Silva “Tráfico de Seres Humanos – Dificuldades e Desafios da Prevenção e Repressão” Tese de Mestrado. Mestrado em Direitos Humanos, sob orientação da Professora Doutora Andreia Sofia Pinto Oliveira, Universidade do Minho, Escola de Direito. Acessível em <https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/46649/1/Manuel%20Melo%20pg28399.pdf>

esforços de criação de mecanismo e instrumentos de prevenção e combate (e repressão).

Para combater de forma mais eficaz esta realidade de crime organizado, profundamente complexa e pluridimensional, os Estados têm vindo a adotar uma abordagem integrada, que além da vertente repressiva de combate ao TSH, punindo os traficantes, que incorpora estratégias de prevenção, de apoio e inclusão das vítimas de tráfico.

Nesta perspetiva, a ACT, como veremos de seguida, é envolvida como agente ativo de prevenção da violação das condições de trabalho. Veja-se a Lei de Política Criminal, Lei n.º 51/2023, de 28 de agosto⁴⁶, que define os objetivos, prioridades e orientações da política criminal para o biênio de 2023-2025, que inclui o *tráfico de pessoas* entre crimes de investigação prioritária (artigo 5.º, aliena a), sendo, por força do artigo 13.º, sob a epígrafe “Prevenção da violação das condições de trabalho” atribuindo à ACT (n.º 2) a *colaboração com os órgãos de polícia criminal e com o Ministério Público na elaboração de planos de ação, visando a prevenção de situações de tráfico de pessoas para efeitos de exploração laboral*. Como tem vindo a acontecer.

A ACT tem sido identificada, como entidade executora, nas diversas áreas estratégicas de intervenção, desde o início dos planos de ação para a prevenção e o combate ao tráfico de seres humanos (2007-2010, 2011-2013, 2014-2017, 2018-2021), mantendo-se igualmente no atual V Plano de Ação para a Prevenção e o Combate ao Tráfico de Seres Humanos 2025-2027⁴⁷ (O V PAPCTSH 2025-2027), aprovado em dezembro de 2024. Este V PAPCTSH 2025-2027, no anexo onde constam os termos subjacentes, reconhece que “A vertente laboral emerge, igualmente, como estruturante nesta nova estratégia, com um apelo a uma maior robustez ao nível das inspeções laborais (...)”.

A ACT, no exercício da atividade inspetiva, dispõe de poderes de autoridade pública, porém não é um Órgão de Polícia Criminal, não tendo por isso, entre outras, competências de investigação criminal para fins de inquérito e instrução em processo penal. A ACT é o organismo que controla e fiscaliza o cumprimento das normas laborais nas relações privadas de trabalho e das normas de segurança e saúde nas relações de trabalho privadas e nas

46 Consultável na íntegra em https://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=3690&tabela=leis&ficha=1&pagina=1

47 Acessível em <https://www.cig.gov.pt/wp-content/uploads/2025/01/V-Plano-TSH.pdf>

relações de trabalho em funções públicas. Nesta medida, os inspetores do trabalho são responsáveis por promover a regularização de todas as situações de trabalho, em toda a sua dimensão, e pela sinalização aos órgãos de polícia criminal das situações em que consideram estar perante uma situação de tráfico de seres humanos para exploração laboral.

Nos termos do Estatuto da Inspeção do Trabalho (EIT), aprovado pela Lei 102/2000, de 2 de junho, e em linha com as convenções da OIT já supra referidas, o inspetor de trabalho tem os poderes de consignados no artigo 11.º do EIT, sendo de elevada relevância o poder de visitar e inspecionar qualquer local de trabalho, a qualquer hora do dia ou da noite e sem necessidade de aviso prévio. Este poder (e sem necessidade de qualquer mandato judicial) que lhes permite aceder aos locais de trabalho nas reais circunstância e condições em que, por norma, estes locais se encontrariam, aliado aos conhecimentos técnicos e comportamentais dos inspetores e inspetoras da ACT, dá-lhes um papel especialmente privilegiado quando contactam num primeiro momento com uma potencial situação de trabalho forçado. Dispondo ainda os inspetores dos demais poderes previsto no EIT, como o de interrogar o empregador, trabalhadores e qualquer outra pessoa que se encontre nos locais de trabalho sobre quaisquer questões relativas à aplicação de disposições legais, regulamentares ou convencionais, a sós ou perante testemunhas, com a faculdade de reduzir a escrito as declarações, sem prejuízo do direito de ser assistido por advogado, bem como do disposto no direito processual penal quanto aos arguidos; o de solicitar a identificação das pessoas presentes no local de trabalho; bem como o de requisitar, com efeitos imediatos (ou para apresentação nos serviços), examinar e copiar documentos e outros registos que interessem para o esclarecimento das relações de trabalho e das condições de trabalho, nomeadamente da avaliação dos riscos profissionais, do planeamento e programação da prevenção e dos seus resultados, bem como do cumprimento das normas sobre emprego, desemprego e pagamento das contribuições para a segurança social; podendo o inspetor efetuar registos fotográficos, imagens vídeo e medições que sejam relevantes para o desenvolvimento da ação inspetiva, o que de facto, confere aos inspetores da ACT um relevante papel na sinalização precoce de TSH a OPC.

Porém, o trabalho da ACT participando na prevenção e combate aos TSH é diversificado e tem um forte componente informativa.

Destaco a celebração, junho de 2013, do Protocolo de Compromisso da Rede de Apoio e Proteção às Vítimas de Tráfico (RAPVT) promovido pela

Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género e assinado por 24 organismos governamentais e não governamentais, de entre os quais a ACT. Esta rede foi um importante impulso para a agilização de contactos entre as entidades identificadas como relevantes e agentes de ação neste domínio e criando sinergias para melhor responder à necessidade da proteção dos trabalhadores potenciais vítimas de tráfico para exploração laboral.

A questão da exploração laboral é objeto referencial de planeamento da atividade da ACT e encontra-se associada ao desenvolvimento de dinâmicas de combate à precariedade e ao trabalho não declarado e reconhecimento das garantias de igualdade e não discriminação, bem como dinamização do diálogo social. Refira-se também, as alterações ao Código do Trabalho e legislação conexas, operadas pela Lei n.º 13/2023, de 3 de abril, destacando o agravamento geral do quadro sancionatório e o aditamento de mais um crime – o de omissão de comunicação de trabalhador à Segurança Social (106.º-A do Regime Geral das Infrações Tributárias) – como elemento dissuasor do recurso ao trabalho não declarado.

A ACT tem apostado e diversificado planos comunicacionais de divulgação de informação sobre as condições justas e dignas de trabalho em Portugal – quer em colaboração com parceiros institucionais e não institucionais, quer de forma isolada.

A ACT, por si só ou juntamente com outras entidades, designadamente municípios, associações de empregadores e organizações não governamentais e outros organismos do Estado, promoveu e promove fóruns de divulgação, de informação e esclarecimento das condições de trabalho digno em Portugal. Para o efeito, foi desenvolvido produto comunicacional para, de forma harmonizada os 32 serviços desconcentrados da ACT divulgarem os aspetos mais relevantes da legislação laboral portuguesa que abordam temas como a igualdade e não discriminação; as normas específicas relativas à contratação de estrangeiros; a retribuição e outras prestações patrimoniais – de entre as quais o pagamento em espécie – onde se destaca o alojamento; duração e organização dos tempos de trabalho e de descanso; segurança e saúde no trabalho; acidentes de trabalho e doenças profissionais; recrutamento e agências privadas de colocação e empresas de trabalho temporário; etc.

Com a intensificação dos fluxos migratórios, a ACT tem vindo a desenvolver um conjunto diversificados de folhetos informativos sobre as condições gerais de trabalho em Portugal com informação pertinente em matéria

laboral, e de segurança e saúde no trabalho. Estes folhetos foram elaborados em diversos idiomas⁴⁸ além do português, inglês ou francês, encontram-se também ucraniano, hindi, nepalês, chinês, romeno, inclusive, identificam os riscos para a segurança e saúde dos trabalhadores mais comuns e os comportamentos de prevenção relativos aos setores de atividade e às profissões que mais atraíam mão-de-obra não qualificada⁴⁹.

Em colaboração com uma ONG (Associação para o Planeamento da Família-Delegação do Alentejo) foi desenvolvida informação dirigida aos empresários alertando para o risco e as consequências legais de contratualizar com “empregadores/angariados” de mão-de-obra explorada, possíveis vítimas de TSH para esse fim.

Em colaboração com o Observatório para o Tráfico de Seres Humanos (OTSH), desenvolvemos um *pocketcard*, ferramenta de apoio ao trabalho dos inspetores que contém uma súmula dos indicadores essenciais de tráfico de seres humanos e os contactos das ONG especializadas nesta matéria com resposta de acolhimento de vítimas (casas-abrigo).

O reforço na aposta da informação e sensibilização dos grupos vulneráveis de trabalhadores levou a ACT a colaborar diretamente com instituições privadas e públicas com inserção regional, designadamente os municípios e as comunidades educativas e associativas locais. Estas sessões são promovidas em parceria com câmaras e organizações não governamentais – e nomeadamente associações de imigrantes representativas das nacionalidades presentes em território nacional. De igual modo temos desenvolvido ou participado em diversas campanhas, nomeadamente ao nível europeu, promovidas pela Plataforma de combate ao trabalho não declarado ou pela Autoridade Europeia do Trabalho, como por exemplo a *Campanha Europeia sobre Trabalhadores Sazonais – para um trabalho justo*.

A ACT estabeleceu um programa de formação para os inspetores sobre Tráfico de Seres Humanos para Exploração Laboral e Trabalho Forçado com a colaboração da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG), sendo regularmente formados em tópicos nesta temática com foco especial na exploração de mão-de-obra. A formação tem contado com a colaboração do Gabinete do Procurador-Geral da República, da Polícia Judiciária, do

48 Veja em <https://portal.act.gov.pt/Pages/trabalhador-estrangeiro.aspx>

49 A ACT beneficiou do apoio da Autoridade Europeia do Trabalho, nos serviços de tradução de alguns dos folhetos informativos.

Observatório do Tráfico de Seres Humanos, da CIG e da Associação para o Planeamento Familiar.

Os inspetores da ACT beneficiam ainda de aprendizagens proporcionado pela Plataforma de combate ao Trabalho Não declarado, e interação com entidades congéneres e partilha de boas práticas no âmbito e com o apoio da ELA em matérias que se relacionam com trabalho não declarado, falsos destacamentos de trabalhadores e outras situações de vulnerabilização de trabalhadores.

O trabalho inspetivo tem em conta diretrizes da OIT para o gesto profissional dos inspetores do trabalho neste âmbito, contidas no documento “Trabalho forçado e tráfico de seres humanos: um manual para inspetores do trabalho”.

A intervenção inspetiva da ACT em situações suspeitas de tráfico de seres humanos para exploração laboral/trabalho forçado é frequentemente dinamizada num cenário de cooperação com todos os atores relevantes, por forma a tornar a sua intervenção assertiva e melhor sucedida. No quadro desta cooperação, se se encontram simultaneamente presentes as entidades com competência de investigação deste crime e identificação das vítimas, compete à ACT, tão só, a salvaguarda dos cumprimentos dos direitos associados às condições de trabalho dos trabalhadores.

A ACT, através dos seus inspetores, é parte nas ações desenvolvidas conjuntamente com a Polícia Judiciária e as polícias de proximidade, e anteriormente com o SEF, e em simultâneo com congéneres de outros países europeus, com vista a deteção de situações de tráfico de seres humanos para exploração laboral, nos designados *Joint Action Days* (JAD).

No período 2023-2024, relativamente a ações JAD, realizados em junho e setembro ACT foram abertos 162 processos inspetivos abrangendo 176 entidades empregadores dos nos setores da Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca; Comércio por grosso e a retalho; na reparação de veículos automóveis e motociclos; Atividades administrativas e serviços de apoio; Construção; Indústrias transformadoras e Alojamento, restauração e similares, abrangendo. Estas ações abrangeram 2.352 trabalhadores, dos quais 798 eram cidadãos não nacionais.

Ainda no período de 2023-2024, a ACT participou em 189 intervenções em colaboração com OPC, a maioritária das intervenções ocorreu nos setores Agrícola, Construção Civil e Indústria Hoteleira.

No mesmo período, a ACT fez ainda as 4 participações crime concretamente por verificar a existência de indícios do crime Tráfico de seres humanos.

No âmbito da Comunidade de Países de Língua Oficial Portuguesa, CPLP, e da cooperação do Ministério do Trabalho, da Solidariedade e Segurança Social português a ACT é o ponto focal para os assuntos da erradicação do trabalho infantil, bem como para o das inspeções do trabalho, cabendo a responsabilidade de colaborar em planos estratégicos e planos de ação que, com o apoio da OIT à CLP, contribuam para, por um lado erradicar o trabalho infantil, nas suas piores formas, e por outro tornar mais robustos os sistemas de inspeção dos países da CPLP.

Portugal como membro da ONU e da UE e igualmente enquanto membro da CPLP integra a Alliance 8.7⁵⁰ contribuindo para “Promover o crescimento económico sustentado, inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos”. E “Tomar medidas imediatas e eficazes para erradicar o trabalho forçado, acabar com a escravidão moderna e o tráfico de pessoas e garantir a proibição e eliminação das piores formas de trabalho infantil, incluindo o recrutamento e utilização de crianças-soldado, e até 2025 acabar com o trabalho infantil em todas as suas formas”.

Na verdade, a complexidade e sofisticada capacidade de organização das redes de tráfico de seres humanos, auxiliada pela evolução da tecnologia, pela facilidade de deslocar significativos grupos de pessoas para as várias formas de exploração, incluindo a laboral, convoca-nos, a todos, a uma participação ativa e concertada, buscando ferramentas mais eficazes, combatendo as causas (pobreza, fragilidades várias, discriminação, desigualdades, baixa instrução, etc. etc.), protegendo as vítimas e condenando os criminosos.

50 Em <https://www.alliance87.org/about/partners> e também <https://www.alliance87.org/challenge>.